

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA

Medellín, veintidós (22) de marzo del dos mil veintitrés (2023)

Auto Interlocutorio No.	013
Instancia	Primera
Radicado Juzgado	05-000-31-20-002-2022-00062-00
Radicado Fiscalía	110016099068-2017-01062 E. D
Proceso	Demanda de Extinción de Dominio
Trámite	Control de legalidad a medidas cautelares
Fecha resolución de medidas cautelares	30 de agosto de 2021
Materialización de medidas cautelares	03 de septiembre de 2021
Autoridad que decretó medida	Fiscalía 65 especializada
Afectado por la medida	María Inés González Vélez y otros
Solicitante representante y apoderado del afectado	Diego Humberto Cuadros Arango ¹
Número de bienes cautelados por los que se reclama el control	2
Tipo de Bien	Inmuebles
Identificación del bien cautelado	Matrícula inmobiliaria: 01N-5298991 y 01N-5298699
Causales de extinción de dominio enrostradas y/o por las cuales se procede en la causa principal:	Ley 1708 de 2.014 artículo 16 numerales 1, 4, 5, 7 y 9
Causales de control de legalidad invocadas	Art. 112. Numeral 1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio. Art. 112. Numeral 2. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines . Art. 112. Numeral 3. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada . Art. 89. Caducidad y vigencia
Despacho que conoce del proceso principal	Juzgado Primero Penal Del Circuito Especializado en Extinción De Dominio - Antioquia
Radicado del proceso principal en juzgamiento	05-000-31-20-001-2022-00031-00
Asunto	Declara legalidad de medida cautelar.

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a resolver la solicitud de control de legalidad de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de

¹ Notificaciones en email: dhcuadrosa@gmail.com - Celular: 3215653687

los bienes inmuebles distinguidos con matrícula inmobiliaria 01N-5298991 y 01N-5298699 de propiedad de la señora **MARÍA INÉS GONZÁLEZ VÉLEZ**, reclamada por el apoderado **DIEGO HUMBERTO CUADROS ARANGO** mediante memorial del 02 de agosto de 2022 y ordenadas por la Fiscalía 65 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio en decisión contenida en resolución del 30 de agosto de 2021.

2. HECHOS

Precisa el delegado de la Fiscalía en esta causa como marco fáctico en la resolución de medidas cautelares y consecuente demanda que:

(...) "El presente trámite de Extinción del Derecho de Dominio se origina por la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía 27 Especializada de BACRIM, que dan cuenta de la captura de FREYNER ALFONSO RAMÍREZ GARCÍA, conocido con el Alias "Carlos Pesebre".

A partir de los actos de investigación adelantados en los procesos penales, por la Fiscalía 71 DECOC Medellín, se ha logrado establecer la existencia de una organización denominada GDO "ROBLEDO", la cual en un principio fue conformada por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Bloque Cacique Nutibara y desde entonces, fue catalogada por las autoridades como "Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico" (ODIN), hoy denominadas GDO Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), previo análisis de su estructura, capacidad, zonas de injerencia y comisión de delitos.

Los orígenes del GDO Robledo se remontan a la década de 1990, para aquella época existía un "combo" de jóvenes provenientes del barrio El Pesebre (comuna 13), dirigidos por Freyner Alfonso Ramírez García, alias "Carlos Pesebre", quien, en su estructura delincuencial, contaba con un ala sicarial al servicio de las milicias urbanas de la ciudad de Medellín y algunos miembros del Cartel de Medellín.

En el año 2000, tras la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia a la ciudad de Medellín, el grupo delincuencial liderado por "CARLOS PESEBRE", se incorporó al Bloque Cacique Nutibara, quedando bajo las órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", cuyas acciones consistieron en coordinar el funcionamiento y fortalecimiento de la estructura criminal en las comunas 7 y 13, esto conllevó a conflicto con algunas milicias urbanas, y en donde establecieron el dominio sobre las diferentes fuentes de ingresos ilícitos.

Tras la desmovilización de los grupos paramilitares durante los años de 2003 — 2005, el GDO Robledo, actuando ahora bajo el título de "Los Pesebreros", pasó a ser parte importante de la

denominada "Oficina de Envigado". Desde allí siguieron controlando las zonas que les habían sido designadas desde su pertenencia a las autodefensas y se fueron expandiendo rápidamente, llegando a consolidar su territorio en las comunas de Robledo (7), Laureles (11), La América (12), San Javier (13), y el corregimiento de San Cristóbal.

Con el paso del tiempo y debido al trabajo conjunto de la Fiscalía con el apoyo de la fuerza pública se han originado diferentes operaciones de impacto que permitieron la captura de Freyner Alfonso Ramírez García, alias "Carlos pesebre" (19/03/2013) como Cabecilla principal y fundador del grupo delincriminal GDO "ROBLEDO", y seguidamente los cabecillas que lo iban reemplazando, como es el caso de Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias "Sombra" (22/04/2018), Julián Alberto Jiménez, alias "Machete" (19/01/2019), Juan David Mosquera Álvarez, alias "Lunar" (10/02/2019), John Fredy Pabón González, alias "Toño" (23/07/2020) y posteriormente su jefe financiero German Augusto Ramírez Ramírez, alias "Mancho", quienes encuentran recluidos en centros carcelarios, la mayoría de ellos con sentencia condenatoria, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico de armas y falsedad documental, entre otros, por ser cabecillas e integrantes de esta organización delincriminal.

De acuerdo a los actos de investigación adelantados dentro del trámite de Extinción de Dominio, se logró establecer que este grupo delincriminal GDO ROBLEDO, sus cabecillas e integrantes en su mayoría no figuran con propiedades a su nombre, pero se logró la identificación de bienes en cabeza de su núcleo familiar y terceros, los cuales hasta este momento procesal no cuentan con capacidad económica para su adquisición.

Igualmente, se logró establecer a través de los actos de investigación que estas organizaciones delincriminales controlan muchos productos de primera necesidad, entre ellos, el gas propano (cilindros de gas), con la anuencia de empresas legalmente constituidas, que al parecer han permitido la competencia desleal, el acaparamiento y en especial la especulación en los precios...". (...)

3. COMPETENCIA

La Jurisdicción como manifestación concreta de soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional como única e indivisible y en virtud de la especialidad de las diversas materias jurídicas que ciñen la competencia y que se deben considerar y aplicar para la mejor y más eficiente prestación de este servicio público, es decir, en atención del aspecto funcional, carga y materia, ha de significarse que por la naturaleza del asunto, especialidad y calidad del operador de instancia en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 39 de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, este Despacho y

correlativamente el suscrito funcionario es competente para resolver la solicitud de control de legalidad presentada por el apoderado de la parte afectada.

4. DE LA SOLICITUD

En memorial presentado ante la Fiscalía General de la Nación, el doctor DIEGO HUMBERTO CUADROS ARANGO, quien actúa como apoderado judicial de la señora **MARÍA INÉS GONZÁLEZ VÉLEZ**, solicita control de legalidad para que se revise la legalidad formal y material a las medidas impuestas por la Fiscalía 65 E.D.

Relata en su escrito el comportamiento social, económico, laboral y estudio de la señora **MARÍA INÉS GONZÁLEZ VÉLEZ**, para establecer su estabilidad patrimonial con el fin de determinar que el bien inmueble perseguido fue fruto de su trabajo, y no de un incremento patrimonial no justificado, al respecto expresó:

“...Para el ente fiscal lo único que tiene valor para dicha justificación es que el bien se haya adquirido con dineros producto de actividades comerciales formales, que bajo este supuesto más de la mitad de los bienes de nuestra sociedad no se podrían justificar debido a la siempre existente informalidad. La delegada Fiscal no esgrime elementos de conocimiento suficientes que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas...”

Por lo anterior, el apoderado, señala que no existen los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que los bienes afectados con las medidas cautelares tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.

De igual forma, manifiesta que no se estaría cumpliendo con los requisitos del numeral 2º y 3º del artículo 112 del C. de E. de Dominio, pues considera que las medidas cautelares son desproporcionadas, inadecuadas, excesivas y vulneradoras de derechos fundamentales, convirtiéndose en un accionar arbitrario por parte de la Fiscalía. Agrega que el Ente Persecutor no expone la razonabilidad y la necesidad de las medidas y que además no realizó una suficiente y adecuada investigación y no recolectó los elementos de prueba suficiente para acceder a la valoración probatoria que le permitiera más allá de toda duda imponer las medidas cautelares. Refiere incluso que la Fiscalía no realizó una debida motivación y que la resolución no cuenta con elementos de juicio suficientes que permitan considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio y que por ello carece de ejercicio argumentativo. Indica además que *“el bien de propiedad de la afectada fue vinculado arbitrariamente sin existir causal por el simple hecho de ser la madre de una persona que aparece como miembro de un grupo delincuenciales sin una concreta investigación”*.

También indica que en este caso se estarían dando los postulados del artículo 89 del C. de E. de Dominio, pues considera la Defensa que en cuanto al carácter de temporalidad que exige la norma, se puede observar que se presenta una mora injustificada, pues las medidas cautelares fueron adelantadas el 30 de agosto de 2021, y las mismas no se podían extender por más de seis (6) meses, o sea que solo podían llegar hasta el 30 de enero de 2022, fecha para el cual la Fiscalía las tenía que levantar, y al no hacerlo, estaría entrando en un desacato a lo dictado por el artículo 89 de la ley 1708 del 2014.

Bajo los anteriores argumentos solicita entonces a la judicatura se decrete la ilegalidad de las medidas cautelares y a su vez, se levanten dichas medidas gravosas que le fueron impuestas a los bienes de su protegida.

Presenta como medios de conocimiento para satisfacción de sus pretensiones como anexo la historia laboral de cotización a pensión de la afectada.

5. BIENES OBJETO DEL CONTROL DE LEGALIDAD

El peticionante del control de legalidad distingue los bienes sujetos a este control y que fueron objeto de medida como los siguientes:

1-

Tipo de Bien cautelado.	Inmueble
Clase	Apartamento
Identificación del bien cautelado.	MI 01N-5298991
Título de adquisición	Escritura 9658 del 27/08/2010 de la Notaria 15 de Medellín
Dirección	Carrera 76 A #53-35 INT 2101
Municipio	Medellín - Antioquia
Propietario inscrito	María Inés González Vélez
Linderos	Por el oriente con muros, ventanas y balcones que forman la fachada principal de la torre, por el sur, con el muro que forma la fachada lateral izquierda de la torre y muro y ventana que dan a vacío, por el occidente con muro que lo separa del apartamento 2102, por el norte con muros y puerta de acceso que lo separan del punto fijo de la torre norte y muro que forma fachada, por el nadir con losa que lo separa del vigésimo piso por el cenit con cubierta que forma el techo.
Valor del acto	\$ 150.144.000

2 -

Tipo de Bien cautelado.	Inmueble
Clase	Parqueadero
Identificación del bien cautelado.	MI 01N-5298699
Título de adquisición	Escritura 9658 del 27/08/2010 de la Notaria 15 de Medellín
Dirección	Carrera 76 A #53-35 INT 99157
Municipio	Medellín - Antioquia
Propietario inscrito	María Inés González Vélez
Linderos	Por el oriente con línea que lo separa del parqueadero No. 156, por el sur con muro de cierre, por el occidente con línea que lo separa del

	parqueadero No. 158, por el norte con línea que lo separa de la zona de circulación vehicular, por el nadir con losa que lo separa del segundo piso, por el cenit con losa que lo separa del cuarto.
Valor del acto	\$ 150.144.000

6. CONCEPTO DE LOS DEMAS SUJETOS PROCESALES INTERVINIENTES

Frente al traslado que realizara el Despacho a los sujetos procesales, tanto Fiscalía, como Procuraduría y Ministerio De Justicia y del Derecho, guardaron silencio al respecto.

7. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con base en lo expuesto, el Despacho analizará la solicitud presentada por la parte afectada, a fin de verificar si se dan los presupuestos para acceder a su pretensión, o si por el contrario deben ser legalizadas las medidas cautelares ordenada por la Fiscalía 65 Especializada el 30 de agosto de 2021.

Para ello, resulta pertinente señalar la normatividad que rige la presente actuación extintiva.

Así pues, en primer lugar, se debe indicar que la Ley 1708 de 2014- Estatuto de Extinción de Dominio, prevé varias modalidades de control de legalidad en lo que se refiere al proceso de extinción del derecho de dominio.

Estos son el control de legalidad a las medidas cautelares y el control de legalidad sobre el archivo.

La primera clase de control es el propuesto en esta oportunidad, por lo que es necesario mencionar como fue regulado en el Código de Extinción de Dominio:

(...)

“Artículo 111. Control de legalidad a las medidas cautelares.

Las medidas cautelares proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no serán susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, previa solicitud motivada del afectado, del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, estas decisiones podrán ser sometidas a un control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes.

Cuando sea necesario tomar una medida cautelar en la etapa de juzgamiento, el Fiscal General de la Nación o su delegado lo solicitará al juez competente, quien decidirá con arreglo a este Código.

Artículo 112. Finalidad y alcance del control de legalidad a las medidas cautelares.

El control de legalidad tendrá como finalidad revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar, y el juez competente solo declarará la ilegalidad de la misma cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- 1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.*
- 2. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines.*
- 3. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada.*
- 4. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas. (Subrayado y negrillas fuera del texto original)*

Artículo 113. Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares.

El afectado que solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo anterior.

La presentación de la solicitud y su trámite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.

Formulada la petición ante el Fiscal General de la Nación o su delegado, este remitirá copia de la carpeta al juez competente que por reparto corresponda.

***Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano.** En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.*

Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, serán susceptibles del recurso de apelación.” (Subrayado fuera del texto)

(...)

En lo que tiene que ver con los fines y las clases de las medidas cautelares, los artículos 87 y 88 de la Ley 1708 de 2014 prevén lo siguiente:

*(...) **Artículo 87. Fines de las medidas cautelares.** Al momento de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión el fiscal ordenará, mediante providencia independiente y motivada, las medidas cautelares que considere procedentes con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita. En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. (Subrayado fuera del texto original)*

***Artículo 88. Clases de medidas cautelares.** Aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo.*

Adicionalmente, de considerarse razonable y necesarias, se podrán decretar las siguientes medidas cautelares:

- 1. **Embargo.***
- 2. **Secuestro.***
- 3. **Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.***

***La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo** se inscribirá de inmediato en el registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción por parte de la entidad respectiva y sin consideración a la persona que alega ser titular del bien, dado el carácter real (hoy patrimonial) de la presente acción. (...)*

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La naturaleza o características principales de las medidas cautelares son, entre otras: **accesoriedad**, pues su existencia depende de un proceso originario; **instrumental**, al no constituir un fin en sí mismas pues buscan proteger la integridad de un derecho controvertido en el proceso originario y finalmente, **provisional y temporal**, por lo cual solo se mantendrán mientras que el proceso dure o mientras que el riesgo de la integridad del derecho controvertido, persista.

La finalidad por excelencia de las medidas cautelares, no es otra que garantizar que el bien objeto de la acción no sea ocultado, gravado, negociado, distraído, transferido o que pueda sufrir deterioro, extravío o destrucción, o para cesar su uso o destinación ilícita, conforme lo prevé el artículo 87 del estatuto de Extinción de Dominio, en aras de evitar así que en caso de proferirse una sentencia que declare la extinción de dominio sobre determinado bien, esta carezca de efectividad por carencia del objeto.

De cara a los planteamientos presentados por la defensa para decrete la ilegalidad de las medidas cautelares, ha de señalarse previamente que la propiedad privada es objeto de protección Constitucional, conforme al artículo 58 de la Carta Política, y también a través de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 17, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 21.

El desarrollo jurisprudencial ha establecido que la propiedad es un derecho fundamental cuando tiene una relación directa con la dignidad humana², lo que determina fortalecer su ámbito de protección, ya que los derechos fundamentales son un *“parámetro de legitimidad del sistema político y jurídico”*³, por lo que deviene que la propiedad no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas que desconozcan el interés del propietario de obtener una utilidad económica sobre sus bienes y contar con las condiciones mínimas de goce y disposición.

Pese a lo anterior, es claro que la propiedad no es en realidad un derecho absoluto, pues el Estado puede imponer limitaciones, como ocurre en los procesos de extinción de dominio, por razón de haber sido adquiridos con

² Sentencia T-454/12 Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. _

³ URBANO MARTÍNEZ José Joaquín, La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal. Ediciones Nueva Jurídica, 2 edición. 2013 pg.103.

dineros originados en actividades ilícitas o ser destinados al delito, siendo entonces las medidas cautelares el instrumento para evitar que los bienes objeto del proceso puedan ser ocultados, distraídos, negociados o transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción, o también que pueda persistir su indebida destinación.

La vigencia de la Ley 1708 de 2014 con sus modificaciones y la regulación atinente a las medidas cautelares prevista en sus artículos 87 y 88 instruye que las mismas tienen carácter preventivo y no sancionatorio, porque protegen el derecho a la propiedad, garantizan el principio de publicidad y limitan el tránsito de bienes afectados en el comercio de manera provisional, mientras se adopta una decisión de fondo.

Para que su decreto (el de las medidas) resulte procedente, debe perseguir y evitar que los bienes cuestionados sufran variación en su titularidad, deterioro, extravío o destrucción, o cesar el uso o destinación ilícita; y en cada caso se estudiará de cara al control de legalidad la causal invocada y su legalidad misma, para conjurar o no las restricciones, resaltando sus características del ruego, como son su posterioridad al de la resolución de la medida, su ruego, el acatamiento de las reglas y técnicas y su escrituraria, los tintes de publicidad y respeto por los derechos de los afectados que deben primar a partir de la materialización de las medidas cautelares.

Corolario a lo anterior, debe anotarse que al imponerse una medida cautelar el funcionario debe:

- i) Contar con elementos de juicio suficientes para considerar **el probable vínculo del bien con la causal** de extinción de dominio a esgrimir o utilizar⁴.
- ii) Fijar y puntualizar que la materialización de la medida se muestre como **necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines**⁵.
- iii) **Motivar adecuadamente su finalidad** y
- iv) **Evitar que la decisión esté fundamentada en prueba ilícita**⁶.

Por lo tanto, debe tenerse claro que en la imposición de las medidas cautelares la Fiscalía tiene deber múltiple, tal como lo dispone el artículo 88 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el artículo 20 de la Ley 1849 de 2017, pero adicional a lo anterior, es necesario considerar que, la medida cautelar que con carácter general tiene procedencia en el trámite de extinción de dominio, es la suspensión del poder dispositivo, y solo de manera excepcional pueden imponerse el embargo y secuestro, pero con la carga adicional para el funcionario judicial, de exponer la razonabilidad y necesidad de las mismas.

La razonabilidad implica que el funcionario realice un análisis sobre la adecuación e idoneidad de la medida a imponer frente al objetivo que se persigue con la misma. Es decir, que es imperioso establecer en concreto por qué razón el embargo y el secuestro son las medidas que deben decretarse para lograr el fin propuesto, es el ocultamiento, negociación, distracción, etc. Se trata

⁴ Negrillas del despacho.

⁵ Negrillas del despacho.

⁶ Esta es la causal a que refiere el memorialista instante del control de legalidad.

CALLE 41 #52 – 28 EDIFICIO EDATEL OFICINA 202 TEL: 4082248

j02pctoespextdmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

entonces de un análisis del fin de la medida, el medio elegido y la relación entre uno y otro.

Por otra parte, la necesidad consiste en establecer que la intervención o limitación del derecho fundamental a la propiedad se realiza a través de la medida más favorable para el mismo, esto es que no existe en el ordenamiento una medida menos lesiva, pues de ser así, deberá preferirse sobre la otra.

9. DEL CASO CONCRETO

Sea lo primero significar de imperativo juicio de confrontación los bienes relacionados, identificados e individualizados por el peticionante como objeto principalísimo del control de legalidad, que los mismos efectivamente se encuentran inmersos con afectación en la resolución de la Fiscalía de fecha 30 de agosto de 2021 que decretó las medidas cautelares y conforme a lo cotejado con los respectivos certificados de libertad y tradición, por lo que hace viable la continuación del estudio de la legalidad formal y material reclamado en las voces del canon 112 ídem.

9.1. Control formal.

Como quiera que la finalidad del control de legalidad es revisar, examinar e inspeccionar la autenticidad, legitimidad y valga redundar, la legalidad formal y material de las medidas, es imperioso reseñar que, en cuanto al punto de lo formal, esto es, de los procedimientos según los cuales se cumplen dichos actos, o manera de presentación o forma en que esa cautela jurídica se manifiesta, la solicitud presentada de control de legalidad desde lo formal, no está llamada a

prosperar, pues el modo, la forma, el procedimiento, la guisa, el medio y la grafía misma impresa por la Fiscalía para tomar tal determinación cautelar o preventiva en su acto propio e idóneo de resolución se encuentra ajustada a derecho y a la forma propia del enjuiciamiento extintivo que regula el Estatuto de la misma materia, en punto que, con un acto procesal llamado resolución de medidas cautelares de manera íntegra resuelve el tema tratado y presenta a través de este acto en su parte resolutive la imposición de las mismas.

Recuérdese que al tenor del artículo 48 del C. de Extinción de Dominio, las providencias que se dicten en la actuación extintiva se denominarán sentencias, autos y resoluciones y son estas últimas las que profiere el Fiscal. De allí que la providencia que contiene la decisión de medidas cautelares optada por el Fiscal es una resolución y a su vez este instrumento procesal como providencia interlocutoria deberá contener como mínimo legal expreso por mandato de la norma, jurisprudencia y practica forense procesal, los siguientes a saber:

- i. Una breve exposición del punto que se trata, (asunto)⁷
- ii. los fundamentos legales, (fundamentos jurídicos)
- iii. la decisión que corresponda y (parte resolutive)
- iv. los recursos que proceden contra ella⁸. **(información del control de legalidad a la que puede ser sometida)**

De acuerdo con lo anterior, el ente Fiscal en su instrucción sumarial de acuerdo a su percepción investigativa, intuitiva, y jurídica, e inmediación probatoria (fase inicial), estimó conveniente decretar las medidas cautelares a los bienes de propiedad de los aquí afectados como dice el art. 87 del C. de E. de Dominio,

⁷ 1. Objeto de pronunciamiento

⁸ Artículo 50 CDED

y por ello adoptó medidas cautelares en fase inicial de instrucción, mediante providencia independiente, estructurada y motivada (resolución), con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan pudieran ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o que pudieran sufrir deterioro, extravío o destrucción.

La autoridad Fiscal persecutora en extinción, a través de ésta pieza procesal (resolución de medidas cautelares) presentó y desarrolló un objeto de pronunciamiento de conformidad con los artículos 87 y 88 del Código de Extinción de Dominio que la autoriza, presentando una competencia en razón de los artículos 34 de la Ley 1708 de 2014 que la apodera y capacita, para decretar medidas cautelares en consonancia de estos mismos artículos enunciados (artículos 87 y 88 del C. E. D), satisfaciendo a plenitud lo exigido en la normatividad que regula la materia y, dejando así, aislado y desierto el control legal por la forma.

9.2. Control material.

En cuanto a este espacio de examen y análisis legal, esto es, de las distinciones fundadas en el estudio del contenido del acto jurídico que se analiza y cuestiona, o causales propiamente dichas, por las cuales se legitima su accionar, es mucho más fácil constatar, ya que nuestro sistema jurídico actual dentro del paradigma constitucional no sólo incluye criterios formales de eficacia y validez, sino también materiales; esto quiere decir que, todas las normas del ordenamiento y los actos procesales, incluso los autos y providencias en general (incluidas las resoluciones de la fiscalía) deben ser respetuosos con unos contenidos honestos, morales, adecuados, necesarios, proporcionales, razonables y con mínimos jurídicos si quieren integrarse y formar parte del ordenamiento y desplegar

efectos forenses y no violentar derechos y garantías fundamentales, pues de lo contrario reñirían contra el ordenamiento y de allí su consecuencia irrefutable de exclusión o revocación, para este caso de declararlo ilegal.

A continuación, se pasará hacer análisis objetivo y material de los propuestos por la parte, como argumento de suyo, significándosele desde ya que sus pedimentos no están llamados a prosperar, por lo siguiente:

9.2.1. Causal primera.

Refiere la norma que contempla este aplicativo de vigilancia, de manera objetiva, que es procedente el control cuando **no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.**

La defensa solicitante encara este postulado no desde la inexistencia de los elementos como ortodoxa y objetivamente debe hacerse, sino desde las causales de extinción de dominio, postura que está totalmente equivocada, pues lo que contempla la norma es que se enuncie la inexistencia de elementos mínimos de juicio, o a su contrario, que se refleje que los presentados por la Fiscalía en su escrito de resolución no son suficientes o se tornan nulos o insuficientes para sustentar la imposición de las cautelas.

El argumento referente a que la propietaria del bien tiene vínculo familiar con el sujeto objeto de la investigación y que esta es la única justificación de la Fiscalía para imponer las medidas, además de que la actividad comercial de la señora MARIA INES GONZALEZ VELEZ no había sido formalizada al

momento de la compra del bien en el 2010, en señalar: *“desconoce la delegada fiscal que la informalidad en el país para el año 2010 era superior al 60% y mucho más elevada para las mujeres. Como ya se ha informado, la afectada por la medida es una mujer empoderada que se ha dedicado al trabajo informal durante la mayor parte de su vida, venta de alimentos en negocios no formalizados y la venta de abarrotes, actividades comerciales de las cuales nunca realizó registro en Cámara de Comercio, ni declaró renta, pero la falta de requisitos formales en la ejecución de una actividad comercial no implica que la misma sea ilícita, por lo cual el producto, de estás tampoco sería ilícito...”* nada tiene que ver con la causal presentada, pues su justificación es propia de un escenario de enjuiciamiento propiamente, en el estadio propicio deberá allegar o solicitar los medios de pruebas que pretenda hacer valer en el juicio.

Ahora bien, no se trata entonces, para alegar esta causal que, de manera enunciativa esta se precise, sino que el discurso soportante de la causal tiene que tener un hilo conector con la misma: no se trata pues de hacer una negación indefinida y sin soporte probatorio tangible en punto que los mismos no existen (refiriéndose a los EMP mínimos), sino que como se mencionó esta debe ser sustentada o si es del caso argumentándose porque los elementos citados por la Fiscalía no son suficientes. Es así entonces, como el Despacho no concibe dicha afirmación de que no existen elementos mínimos de juicio suficientes, pues ampliamente se relacionan en la resolución de medidas un sin número significativo y considerable de elementos de conocimiento, de los cuales partió la Fiscalía para sustentar su medida, esto en cuanto al aspecto cuántico, mensurable y objetivo de la prueba, lo que demuestra sin duda que, **si existen** elementos y no mínimos, sino los **suficientes** para ahincar esta medida.

Se cuenta entonces con evidencia asaz relativa a que JHON FREDY PABON GONZALEZ alias “TOÑO”, se identifica con el apodo de “TOÑO”, que se encuentra procesado por un sin número de conductas ilícitas, que ha ejercido

como miembro y jefe de cofradías criminales, que su madre lo es MARÍA INES GONZALEZ VELEZ C.C 32.471.222 y que los predios por los que se controla son propiedad de esta, bienes identificados con folios de matrícula inmobiliaria 01N-5298991 y 01N-5298699 y los cuales fueron adquiridos en el año 2010 según escritura pública No. 9658 del 27 de agosto de dicha anualidad, por un valor total de \$150.144.000, que fueron cancelados de contado según refiere dicha escritura. Señala entonces al respecto la Fiscalía:

“Llama la atención como ella misma lo manifiesta al momento de suscribir la escritura, que su actividad es la de “ama de casa”, actividad que comporta una serie de actividades, pero las cuales no generan ingresos, aunado a que estos bienes fueron cancelados de contado, suma considerable si se tiene en cuenta que corresponde a \$150.144.000, que fueron cancelados de contado.

Máxime que para el año 2010, año en el cual fue adquirido estos bienes, el salario mensual vigente estaba en la suma de \$515.000, es decir, no hay una coherencia frente al desembolso de esta suma de dinero frente a la actividad que señala desarrollar.

Téngase en cuenta, que de acuerdo a la información entregada por la fuente no formal, señala que el padre de JHON FREDY PABÓN GONZALES alias "TONO", es propietario de unos lotes, no señala a su progenitora, pero no se puede pasar por alto, que de acuerdo a la forma como fueron identificados los bienes que figuran a nombre de MARIA INES GONZALEZ VELEZ y la forma como fue cancelado, sumado que a nombre de JHON FREDY PABÓN GONZÁLES alias "TOÑO", no se le identificó ninguna propiedad, lo que lleva a inferir que los ingresos con los cuales adquirió esta propiedad provienen de las actividades ejecutadas por su hijo JHON FREDY PABON GONZALEZ, desde hace muchos años.

(...)

Bienes que obviamente al ingresar al patrimonio de MARIA INES GONZALEZ VELEZ, persona que no contaba con capacidad económica para su adquisición, le genera un incremento injustificado en su patrimonio, máxime que se infiere que fueron comprados con los ingresos que le genera las diferentes actividades ilícitas realizadas por su hijo PABON GONZALEZ alias "TONO", además, que fue adquirido en pleno auge de las actividades ilícitas ejecutadas, por tanto, deberá demostrar el origen de su patrimonio, partiendo de un patrimonio inicial hasta llegar a un final.”

Según lo anterior, los elementos presentados en la resolución de medidas cautelares y que el suscrito los ha verificado como existentes en el proceso, son

asaces y suficientes y son prueba conducente y pertinente en principio de manera a priori -pues recuérdese que aún falta el juzgamiento- para determinar que probablemente los bienes afectados con la medida tienen vínculo con alguna de las causales de extinción de dominio enrostradas y presentadas en la resolución de medidas cautelares.

Se le advierte a la parte implorante, que la norma o mejor, que la causal de control invocada habla de **elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio**, y efectivamente los hay pues con tan solo dos elementos (pluralidad) o más que existan, pueden considerarse como mínimos para ser asaces y suficientes para fundar la medida cautelar impuesta. Es incuestionable frente a los hallazgos investigativos presentados en las presentes sumarias, y así convalidados por este acusador de instancia en extinción por el nutrido acervo probatorio, donde se destacan múltiples informes policivos, entrevistas, sentencias y trabajos de inteligencia y estructuración criminal, donde presentan una serie de bienes, entre ellos los acusados, vinculados a esta causa extintiva y que deberán entrar a demostrar sus titulares como personas naturales, su actividad personal, familiar, laboral y económica y el cumplimiento de la función social de su derecho de propiedad respecto del bien cuestionado, demostrar su buena fe calificada, pero **ello en el escenario del juicio y no a través del control de legalidad**. Los temas de forma de adquisición, valores, bajos costos, y razones salariales son del resorte del escenario de enjuiciamiento ordinario y no de este control. Lo anterior en razón a que existen unos elementos de probabilidad de verdad bastantes comprometedores en contra de la afectada, como el grado de parentesco o filiación con sujetos investigados criminalmente, quienes han sido aprehendidos y enjuiciados por las autoridades, advirtiéndose además que para

nadie es extraño la existencia de los modelos de testaferrato entre familiares y amigos cercanos para blanquear los productos de los ilícitos.

Vale la pena advertir que es claro para este Juzgador que se están afectando derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y otros colaterales, pero ello obedece a una juiciosa y debida investigación que ha de hacerse en razón de la ley de extinción, instrucción esta que cumple todos los estándares del debido proceso y de respeto de garantías fundamentales, **destacándose además que la medida cautelar es transitoria, temporal** y por ende no definitiva y su aplicación evidentemente se encuentra restringida a los requisitos legales que gobierna la escena extintiva de dominio. La medida cautelar compensa el freno o protección que se le hace al derecho de dominio, el cual queda aislado y en vilo por el tiempo de duración del proceso, hasta que sea sentenciado y la finalidad que persigue es prohibir una eventual enajenación del bien, pues de permitirse se dejaría al proceso sin objeto y en caso de sentencia adversa se vulnerarían derechos de terceros que adquieran con buena fe calificada, por lo que con la medida cautelar se hace necesario prevenir estas consecuencias. De ahí que la Corte Constitucional señale que las medidas cautelares son instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege de manera provisional y mientras dure el proceso la integridad de un derecho que es controvertido, en Sentencia C-379 de 27 de abril de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se pronunció de la siguiente manera:

“(…) Tercera- Razón de ser de la caución, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

Para la Corte, las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea

materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...).

Pues bien, esta es la forma de protección preventiva que se le da al Estado al demandar ante la autoridad judicial la extinción de dominio y lograr que el bien que se persigue subsista de darse un posible fallo desfavorable a los afectados.

Así entonces, el argumento aducido por el petente frente a esta causal, no está llamado a prosperar, pues como se ha ilustrado ampliamente, definitivamente existen elementos **mínimos** de juicio **suficientes** para considerar que probablemente los bienes afectados por la medida tienen vínculo con las causales de extinción de dominio esgrimidas por la Fiscalía en la respectiva demanda.

9.2.2. Causal segunda.

Ahora bien, en cuanto que la materialización de la medida cautelar no se muestre como **necesaria, razonable y proporcional** para el cumplimiento de sus fines, tampoco le asiste razón y derecho a la parte reclamante, ya que el test de proporcionalidad que es inherente y congénito a este estadio y efectuado por la Fiscalía al momento de determinar el decreto de las medidas cautelares si se hizo y es suficiente, teniendo en cuenta que a nombre de JHON FREDY PABÓN GONZALEZ, alias “TOÑO”, como lo señala la Fiscalía, al verificar las bases de datos públicos y privadas por parte del investigador, no se hallaron bienes a nombre de él, pero al identificarse el núcleo familiar, se evidenciaron varios bienes registrados a sus familiares, de los cuales no le queda claro a la Fiscalía como se logró su adquisición en razón a las condiciones particulares de los propietarios de estos.

No le asiste la razón al solicitante respecto a que las medidas cautelares devinieron en desproporcionadas, inadecuadas, excesivas y vulneradoras al derecho fundamental a la propiedad, pues el test de proporcionalidad presentado por la Fiscalía fue adecuado y acertado, pues este Ente Investigador en la Resolución de medidas hizo de manera adecuada las inferencias lógicas, no se distorsiono en el análisis y examen de la prueba y tampoco desconoció en su juicio de valor las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de conocimiento. Así mismo las consideraciones esgrimidas por la Defensa pueden ser controvertidas y desvirtuadas en la sede de juicio, y no por este medio aligerado, en razón que el control de legalidad tiene una finalidad y alcance en revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar, pues como podemos observar, si bien no se cuenta con sentencias condenatorias en contra de la afectada, ni tampoco elementos probatorios que comprometan la responsabilidad penal de la misma, si hay una gran inferencia razonable en que estos bienes están comprometidos con el actuar criminal del señor JOHN FREDY PABON, hijo de la aquí encartada y miembro de la banda criminal conocida como *Robledo*.

Así las cosas, no es necesario que MARIA INES GONZALEZ VELEZ, haga parte o no de la investigación penal ordinaria que hace la FGN, sino que lo que se cuestiona es el origen ilícito de los bienes de propiedad de ésta. En este sentido, la Fiscalía argumentó con suficiente motivación y justificación la necesidad de las medidas cautelares decretadas, su razonabilidad y proporción adecuada, por lo que ha de confirmarse esta argumentación. Expreso el ente fiscal en la resolución de medidas cautelares: *“Por tanto, la señora MARIA INESGONZALEZ VELEZ, deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirió estas propiedades que figuran a su nombre, con los debidos soportes y la trazabilidad de los mismos, atendiendo que no contaba con capacidad económica para haberlos adquirido.*

Bienes que obviamente al ingresar al patrimonio de MARIA INES GONZALEZ VELEZ, persona que no contaba con capacidad económica para su adquisición, le genera un incremento injustificado en su patrimonio, máxime que se infiere que fueron comprados con los ingresos que le genera las diferentes actividades ilícitas realizadas por su hijo PABÓN GONZÁLEZ alias “TOÑO”, además, que fue adquirido en pleno auge de las actividades ilícita ejecutadas, por tanto, deberá demostrar el origen de su patrimonio, partiendo de un patrimonio inicial hasta llegar a un final”.

El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. Así entonces, las medidas se hacen **proporcionales** en tanto que en el proceso existen elementos de conocimiento nutridos que permiten considerar prudente y razonablemente que provienen de actividades ilícitas, y se encuentran camuflados bajo la modalidad del testaferrato, o constituyen un incremento patrimonial no justificado, o están destinados a actividad ilícita, y por ello el nexo entre estos bienes y las causales reseñadas y reprochadas, todo lo cual, permite que constitucionalmente se aplique el trámite extintivo a estos bienes, pues el objetivo es que esos bienes no puedan reputarse legales y permitirles el tránsito del comercio lícito, por ello es necesario que sean sometidos, se reitera, al trámite respectivo (Extinción) y de manera previa y razonada se cautelen ya que las medidas de suspensión del poder dispositivo, así como el embargo y el secuestro, son la herramienta para que estos no puedan ser negociados, ocultados gravados, distraídos, transferidos, deteriorados extraviados o destruidos.

En cuanto a la **proporcionalidad y equilibrio en sentido estricto**, esto es, que se pondere si dentro de todas las medidas que se pueden tomar para alcanzar el objetivo fijado (objetivo que es compatible con la Constitución, y que tiene racionalidad instrumental, esto es que tiene un vínculo entre medios y fines) es el que menos sacrifica el derecho protegido, en cuestión, se llega a la conclusión sin lugar a dudas que si lo es proporcional. Esto porque, estamos hablando del derecho de dominio y a la propiedad y junto con ese derecho, el que se tiene a disponer libremente de él en cualquiera de sus formas y tiempos (enajenarlo, cederlo, donarlo, gravarlo, prendarlo, embargarlo); por ello la acción de extinción de dominio no vulnera el derecho a la propiedad, sino que congela y desvirtúa la titularidad aparente de tal derecho en cabeza de su titular inscrito, a quien se le cuestiona que su bien se encuentra en curso de alguna de las causales extintivas. Ello es así en cuanto parte del presupuesto de que el bien nunca se obtuvo a través de los canales legales, pues sólo son derechos adquiridos aquellos que se obtienen de conformidad con el ordenamiento jurídico. Así entonces para limitar temporalmente este ejercicio del derecho, no existe una forma menos gravosa para sus titulares, que la imposición de las medidas, razón de ser de esta decisión que las confirmará.

Ahora bien, el contenido del concepto de “**razonabilidad**” explorado por la Corte, hace relación a que un juicio, raciocinio o idea, esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Así que para este asunto el juicio, raciocinio o idea presentado para justificar y materializar las medidas cautelares se ejecutó con la prudencia, la justicia y la equidad adecuada que rigen para el caso concreto de extinción de dominio, es decir, se justificó a través de la resolución de medidas cautelares una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad de imponerlas. Con ello en esta exposición de motivos se garantizó que, en este preciso caso, la interpretación de las disposiciones jurídicas se llevó a cabo acudiendo al

criterio finalista, tomándose en cuenta las metas y objetivos establecidos en la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano.

Para su ilustración este operador de instancia le pone de presente que las medidas cautelares decretadas y practicadas en esta causa se hicieron y se hacen **necesarias** para permanecer de manera **temporal** durante el tiempo del juzgamiento del proceso, y **proporcionales y razonables** porque el Proceso de Extinción del Derecho de Dominio tiene como finalidad que a través de una sentencia se declare o no la titularidad a favor del Estado de bienes vinculados a éste, y durante permanezca esta temporalidad de juzgamiento se asegura que el bien permanezca incólume para atender las resultas del fallo que cierra la instancia.

De otro lado, la medida cautelar tiene como primer presupuesto proteger el derecho fundamental a la tutela efectiva y por ello el principio de **razonabilidad** de las medidas cautelares se soporta en la calidad de instrumento de éstas respecto de la sentencia definitiva; entre la fase inicial, la demanda y la Sentencia, donde transcurre un espacio de tiempo durante el cual al no ser cristalizadas y materializadas las medidas, el afectado por el proceso extintivo, puede burlar con miras a anular o impedir los efectos del fallo, variar la titularidad jurídica de sus bienes realizando acciones que permitan que éstos puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción. Es por esto, que excepcionalmente se otorga al Fiscal la potestad de afectar bienes con Medidas Cautelares antes de la Fijación Provisional de la Pretensión o de presentación de la demanda, según sea el régimen que gobierne la actuación, adelantándose entonces a la

conclusión de la Fase Inicial con la emisión de esta resolución, la cual, de todos modos, deberá ser proferida antes de los seis (6) meses.

La suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro se da en razón de existir motivos fundados para inferir que el título de propiedad o acto negocial fue obtenido con causa ilícita, artificios, engaños o fraudulentamente y ésta en nada afecta la estructura o los principios del sistema extintivo por los siguientes motivos: (i) Desde el punto de vista procesal, la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro es una medida exclusivamente patrimonial que no tiene una incidencia necesaria sobre la determinación de la vinculación del bien con la causal enrostrada, a tal punto que puede ordenarse pese a que no exista sentencia condenatoria. (ii) Desde un punto de vista sistemático, no implica una modificación de la estructura o el funcionamiento del sistema extintivo, pues este estatuto permite actualmente que otras medidas cautelares o patrimoniales concurren como un bloque de protección y resguardo como el embargo o el secuestro de cara a las resultas de la sentencia. (iii) Finalmente, tampoco afecta el principio de igualdad de armas ni representa un desequilibrio para las partes, el cual exige que los actores sean contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.

En Conclusión, debemos advertir que las medidas de EMBARGO - SECUESTRO y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO que se impusieron a los bienes objeto del proceso de extinción de dominio cumplen con la finalidad consagrada en las normas referidas en la nueva legislatura porque:

1. Las medidas **son adecuadas** de acuerdo a la pretensión principal y única del Estado a través del proceso de Extinción de Dominio, que busca la extinción

de dominio como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, movimientos o prestezas que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.

2. Las medidas cautelares de EMBARGO - SECUESTRO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO son los instrumentos **adecuados** para garantizar la pretensión del Estado y evitar la disposición física y jurídica de los bienes.

3. Se tiene como probable, de acuerdo a los elementos probatorios allegados al expediente, el vínculo de los bienes con las causales que permiten considerar la adquisición de los mismos con el producto de actividades ilícitas, así como el incremento patrimonial no justificado.

En consecuencia, atendiendo al modo **preventivo y temporal** de las medidas cautelares, se declarará la legalidad de las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a los bienes de propiedad de los aquí afectados, en tanto que son lícitas, proporcionales y razonables, para así mantener los bienes bajo la protección estatal, por lo que el Despacho estima que la medida cautelar adoptada por la Fiscalía 65 Especializada DFNEXT mediante decisión del 30 de agosto de 2021, se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 87 y 88 de la Ley 1708 de 2014; y que, a su vez, de ninguna manera concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 112 ibídem anunciadas expresamente por la defensa como violadas o transgredidas.

9.2.3. Causal tercera.

Ahora bien, en cuanto a que la DECISIÓN DE IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR NO HAYA SIDO MOTIVADA: para el cumplimiento de sus fines, de entrada, impróspera será esta invocación, pues se ha explicado previamente con suficiente ilustración que las medidas adoptadas fueron debidas y ampliamente motivadas, pues este presupuesto va de la mano del test de proporcionalidad ampliamente explicado en esta providencia y que no es necesario repetirlo.

Resulta pertinente explicar y presentar a la parte que conforme a lo consagrado en artículo 87 del C. de E. de Dominio, se hizo una providencia independiente y motivada, es decir dando o explicando con suficiencia la razón o motivo que se ha tenido para hacer o tomar esta determinación, con explicación de los motivos por los cuales se expidió, a fin de evitar que los bienes que se cuestionan, en este caso el bien inmueble objeto de la petición, pueda ser ocultado, negociado, gravado, distraído, transferido o pueda sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita y claramente la salvaguarda de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa, se hará en el escenario propio que es el de juzgamiento y no en el control de legalidad, como equivocadamente lo hace el solicitante.

Es equivocado sostener y concluir en sede de la carencia de motivación de la providencia, que la Fiscalía tenía el deber de lograr probar que la señora MARIA INES GONZALEZ VELEZ se encontraba inmersa en alguna de las causales de extinción de dominio, pues extinción de dominio no juzga personas, sino bienes, y de estos su derecho de dominio, de cara a las causales taxativas del artículo 16 ídem. Se debe advertir también que, cualquier justificación relacionada propiamente con las causales de extinción de dominio y la relación

de los bienes con estas, debe ser en todo caso, presentada en el escenario del juzgamiento en la etapa pertinente.

Respecto a que las medidas no son proporcionables, razonables y necesarias, este Juzgador ya se pronunció en el ítem anterior por lo que no volverá sobre el mismo punto. De igual forma en lo relativo a que la afectada no ha sido condenada o investigada penalmente por hechos que constituyan un tipo penal, lo cual ya se abordó ampliamente.

Finalmente, en relación con lo mencionado por el solicitante relativo a que la sentencia C-327 de 2020 establece que la extinción del dominio procede únicamente cuando su titular es la misma persona que ha realizado las actividades ilícitas de base que fundamentan la facultad persecutoria del Estado, vale la pena advertir que dicha condición solo fue estipulada para los numerales 10 y 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, causales que no fueron invocadas en ningún momento por el ente investigador en la demanda de extinción de dominio y que de ser así, esta situación sería objeto de debate en juicio y no por medio del control de legalidad.

En conclusión, tampoco se reconocerá esta causal para decreto de ilegalidad de las medidas.

9.2.4. Causal atípica de caducidad – Art. 89 Ley 1708 de 2014

Refiere el apoderado que los inmuebles que son objeto de este control de legalidad, fueron afectados por las medidas cautelares el día 30 de agosto de 2021 y que las mismas no podían extenderse por más de seis (6) meses, que solo podían llegar hasta el 30 de enero de 2022, fecha para la cual aduce que la

Fiscalía las tenía que levantar y, que dicho incumplimiento es un desacato a lo dictado por el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014. Agrega que las medidas se han extendido por más de seis (6) meses sin que la Fiscalía haya archivado el proceso o presentado la demanda de extinción de dominio y mucho menos que haya levantado las medidas cautelares por vencimiento de términos.

Respecto a lo anterior este Despacho avizora que lo manifestado no corresponde a la realidad, pues realizando cuentas, desde la fecha de imposición de medidas hasta el 30 de enero de 2022 habrían pasado cinco (5) meses, sin restarle los días que la judicatura entra en receso o vacancia judicial, por lo que el termino se estaría dando hasta el dos (2) de marzo del 2022. En este sentido, procedió entonces el Despacho a verificar la información suministrada por el petente, hallándose que la demanda de extinción de dominio fue presentada por la Fiscalía ante el homólogo Juzgado 01 el día 06 de mayo del 2022, bajo partida 05000 31 20 001 2022 000 31. Al respecto vale la pena advertir que:

La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 29 y 229, controles y garantías en materia de derecho y debido proceso, así como el acceso a la administración de justicia indicando que: "*Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado*". En el desarrollo de este proyecto, es importante y fundamental observar las partes que se aplicarán con relación a los principios en el ejercicio de la ley estatutaria de la administración de justicia y algunos factores determinantes e incidentes que afectan directa e indirectamente la congestión judicial, como también en los incidentes que violan la celeridad y el cumplimiento de la ley para satisfacer las necesidades de los habitantes del Estado colombiano.

El principio de celeridad hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y se asocia con el art. 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el ejercicio de una actividad que ha sido reglamentada.

El principio de eficiencia persigue la reducción de las cargas administrativas procesales y la simplificación de procedimientos, con el fin de promover la eliminación de obstáculos injustificados a la actividad jurídica.

De lo anterior cabe resaltar que el Código de Extinción de dominio habla sobre la mora judicial en su artículo 20, el cual consagra los términos de Celeridad y eficiencia de la siguiente forma:

“Toda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento”.

(...)

Entonces, toda actuación judicial debe surtirse por antonomasia y como ejemplo de manera pronta y cumplida sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales no solamente son perentorios y de estricto cumplimiento, sino que también su transgresión de manera arbitraria, infundada e injustificada conlleva a calificar la conducta del servidor como grave y ponerla en escena potencialmente de sanción disciplinable. Para ello los Fiscales, Jueces, Magistrados y todos los servidores públicos en general que conocen de procesos y trámites, es de su obligación impulsarlos de cara a sus responsabilidades en los tiempos, espacios cronológicos y oportunidades que la Ley, Estatuto o el Reglamento de cada autoridad determina, debiéndose dedicar en forma exclusiva a su proceso asignado, respetando la línea de turnos, de despacho, de categoría, importancia, de jerarquía y de escala, y así impulsarlo en todo su caudal procesal hasta su finiquito instancia.

Así que desde lo subjetivo e intrínseco el plazo tomado por el operador de instancia para su gestión o decisión, tal como lo predicó La Corte se debe explorar e inspeccionar primeramente desde la materialidad y en segundo reglón si se presentó un exceso, desde el juzgamiento de **si se abandonaron sin justificación racional los términos legales previstos para la adopción de la decisión**, en este caso los seis meses dados por la norma (artículo 89 CDEDD); además se debe cuestionar de manera subsiguiente, si la transgresión o quebrantamiento a estos términos o plazos otorgados se debe a aspectos de relevancia, de dificultad, notabilidad, de complejidad, de enredo, de connotación o barullo nacional, regional o municipal, o de cara a la naturaleza del asunto, o presentación de una complicación intrincada y profunda del caso, al número de personas vinculadas, al número de bienes que comprende o hermanados, a la hacienda o caudal de actividad procesal tanto probatoria como investigativa necesaria para tomar la decisión fundada que conforme a derecho corresponda tomar en sede de su instancia, y en esa medida presentadas y comprendidas o justificadas esas situaciones la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y por último, que no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles como situaciones de fuerza mayor o congestión judicial, que además de presentarse autorizan ligeramente el retardo.

La mora judicial se ha definido por La Corte⁹ como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales **que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.**

⁹ Sentencia T-186/17

Ya en la sentencia T-803 de 2012 se definió la mora judicial¹⁰ y se reiteró que es necesario valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento para definir si se configura la lesión de derechos fundamentales. Para ello, se consagraron los siguientes criterios:

- (i) el incumplimiento de los términos judiciales;
- (ii) el desbordamiento del plazo razonable, siendo necesario valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento;
- (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora; y
- (iv) el funcionario incumplidor debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), al igual que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia colombiana, han expresado que el **plazo razonable**, es el derecho que regula la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible.

El concepto plazo razonable resulta ser un concepto jurídico indeterminado que igual se deberá respetar -teniendo en cuenta los diversos parámetros desarrollados- si se pretende, como fin último del proceso, el obtener una decisión jurisdiccional sin demoras innecesarias y en tiempo oportuno.

¹⁰ Se definió la mora judicial como “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”, y que se presenta como “resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos. No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter “injustificado” en el incumplimiento de los términos. La mora judicial se justifica cuando: se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes”.

No toda tardanza o mora judicial envuelve la infracción de los derechos y garantías fundamentales, por lo que es necesario que se compruebe primeramente si se incurre en un desconocimiento del plazo razonable y la inexistencia o no de un porqué que lo justifique.

Igualmente, frente a este tópico ha señalado Corte Constitucional en decisión SU-333 de 2020, la cual fijó los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si hay una mora injustificada y como proceder cuando se presenta este tipo de situaciones:

“Se deberá entonces examinar si (i) se desconocieron los términos legales previstos para la adopción de la decisión; (ii) si la violación a estos se debe a la complejidad del caso, la actividad probatoria necesaria para tomar una decisión fundada, y en esa medida la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y (iii) si no concurren elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles como situaciones de fuerza mayor o congestión judicial”.

Partiendo de la jurisprudencia antes citada, tenemos que dentro de la presente causa hay más bienes involucrados que son en total treinta y nueve (39), entre ellos bienes muebles como inmuebles, establecimientos de comercio, y sociedades, aunado a lo anterior, se tiene que son varios los afectados que se encuentran vinculados dentro del escrito de la demanda, por lo que claramente se evidencia que el presente asunto se enmarca en el numeral 2º, pues como se observa dentro de los anexos allegados por cuenta de nuestro homólogo Juzgado primero, se observa que es bastante denso el material probatorio que consigno la delegada del ente acusador al momento de realizar la presentación de la demanda y que debía ser valorada para su introducción y poder llevar a juicio el presente trámite extintivo, por lo que realizar no solo una valoración probatoria sino que integrar los bienes que puedan ser producto de una actividad ilícita, o un incremento patrimonial injustificado, o que hayan sido

utilizados como medio o instrumento, los que constituyan ingresos o rentas de frutos derivados de los anteriores bienes y lo que siendo de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia como los enmarco la delegada fiscal y sumado a ello, que debe llamar a posibles sujetos procesales para que sean afectados con una medida cautelar, no se podría considerar una tarea sencilla para un servidor judicial.

En consideración a los anteriores criterios, afirmar que es dable concluir que efectivamente la complejidad del asunto se da dentro del presente. Como lo dijo la Sala De Extinción De Dominio del Tribunal Superior de Bogotá dentro del radicado 202200049-01, del 10 de noviembre del 2021 que, para el caso en concreto, se debe poner a consideración el test del plazo razonable desarrollado en el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos, considerando los siguientes criterios *a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.*

Teniendo en cuenta la jurisprudencia antes citada, cabe resaltar el ítem A, como lo es **la complejidad del asunto.**

Igualmente, se enmarca en el numeral 3º que dispone la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, el volumen de trabajo llevado por los miembros de la Fiscalía y sumado a la falta de personal para llevar la gran cantidad de investigaciones, hacen que esa institución este colapsada con su trabajo.

Sobre la materia de estudio, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Extinción del Derecho de Dominio, referente a las mismas circunstancias aludidas por el señor defensor, en el trámite del incidente de control de legalidad, bajo la partida No.

050003120002202200022-01¹¹, afectados Inversiones GLP. S.A.S E.S.P., confirmo el auto proferido por este Juzgado el día 16 de septiembre de 2022, señaló.:

“..... No obstante, aun tomando en cuenta la fecha de vencimiento propuesta por el profesional, esto es, 1 de marzo de 2022, lo cierto es que ya existe la demanda extintiva, concretamente desde el 18 de marzo, por tanto, operó el principio de preclusividad de las actuaciones procesales, de manera que, con la interposición de tal acto, además de haberse superado el supuesto de hechos previsto en la citada norma, quedaron superada las etapas y oportunidades procesales anteriores. En otras palabras, para la Sala no es posible retraer la discusión a la vigencia de un término fenecido, actualmente inexistente, o caducado por el efecto de la formulación de la demanda.”

Es de saber, que el Juzgado Homólogo Primero, admitió la demanda de extinción de dominio promovida por la Fiscalía 65 E.D., en Auto No. 270 de once de julio de 2022, dentro del radicado previamente mencionado. Así las cosas, frente a esta causal el Despacho evidencia un hecho superado pues los posibles derechos que podrían verse afectados con la no presentación de la demanda, ya se encuentran garantizados con la efectiva presentación de la misma, además de que ha operado en plenitud el principio de preclusividad de las actuaciones procesales tal y como lo ha establecido el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Extinción de Dominio, según la jurisprudencia citada.

Por lo anterior, el Despacho estima que las medidas cautelares adoptadas por la Fiscalía 65ª Especializada de Extinción de Dominio, mediante decisión de resolución de fecha 30 de agosto de 2021, se ajustan a los parámetros establecidos en los artículos 87 y 88 de la Ley 1708 del 2014; y, de ninguna manera concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 112 ibídem; razones por las cuales impartirá legalidad tanto formal como material a la mencionada providencia.

¹¹ Decisión de 11 de enero de 2023, MP. Dr. Pedro Oriol Avella Franco.

CALLE 41 #52 – 28 EDIFICIO EDATEL OFICINA 202 TEL: 4082248

j02pctoespextdmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Auto Interlocutorio: 013
Radicado 05-000-31-20-002-2022-00062-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Afectados: María Inés González Vélez y otros
Accionante en control de legalidad: Dr. Diego Humberto Cuadros Arango.
Decisión: **Declara legalidad medidas cautelares**

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la legalidad tanto formal como material de las decisiones emitidas por la Fiscalía 65 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio del 30 de agosto de 2021, en el Radicado de la Fiscalía No. 110016099068-2017-01062 E.D. mediante las cuales se ordenó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión, sobre los bienes debidamente detallados en el capítulo 5 de esta decisión interlocutoria, Inmuebles con matrícula inmobiliaria **01N-5298991** y **01N-5298699** de propiedad de **MARIA INES GONZALEZ VELEZ**.

SEGUNDO: En consecuencia, **DESESTIMAR** las pretensiones de control de legalidad invocadas por **DIEGO HUMBERTO CUADROS ARANGO** (apoderado representante de la afectada), conforme a lo discernido en esta providencia.

TERCERO: Se ORDENA vincular y adosar esta decisión de manera digital al cuaderno principal del radicado de la fiscalía 110016099068-2017-01062 E.D. y ponerla en conocimiento a través de los medios de notificación idóneos a las partes e intervinientes, como asunto de su interés y para los propósitos de impugnación que estimen pertinentes.

Auto Interlocutorio: 013
Radicado 05-000-31-20-002-2022-00062-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Afectados: María Inés González Vélez y otros
Accionante en control de legalidad: Dr. Diego Humberto Cuadros Arango.
Decisión: **Declara legalidad medidas cautelares**

CUARTO: HÁGANSE las respectivas anotaciones y radíquese la actuación en el sistema siglo XXI, además, de conformidad al Acuerdo nro. CSJANTA20-99 del 02 de septiembre de 2.020, Ley 2213 de 2.022 y artículo 44 CDEDD, indíquesele a las partes que deberán hacer uso de los medios tecnológicos y deberán consultar el estado de este trámite a través de la página de la rama judicial, al igual que los estados, edictos, y demás actuaciones procesales, los cuales serán publicados de manera electrónica en la misma página web y **LÍBRENSE** las comunicaciones de ley.

QUINTO: Contra esta decisión **procede el recurso de apelación** ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley 1708 de 2014.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VÍCTOR ALDANA ORTIZ
JUEZ

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA

Se notifica el presente auto por **ESTADOS N° 019**

Fijado hoy en la secretaría a las 08:00 AM.
Desfijado en la misma fecha a las 05:00 PM.

Medellín, 23 de marzo de 2023

JHUDY FRANCELY VÁSQUEZ ARANGO
Secretaría

Firmado Por:
Jose Victor Aldana Ortiz
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 002 De Extinción De Dominio
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1e39dfbf63f7aa0cfb808179774072ac409a75e9cbf7634150adb0c149c00ee1**

Documento generado en 22/03/2023 04:43:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>